

tidos a las personas adultas para que se les considere merecedores de respeto y protección. Cada uno de nosotros fuimos embriones y desde entonces nos fuimos desarrollando a lo largo de una trayectoria biológica continua a través de nuestra existencia. Hablar de un "embrión" es referirse a un ser humano en una fase particular de su desarrollo.<sup>246</sup>

Este informe recomienda la investigación con células madre no embrionarias, por ejemplo, las células madre provenientes del líquido amniótico o de muchas partes del cuerpo. Como hemos dicho anteriormente, las células adultas «pluripotentes» pueden ser reprogramadas para actuar como si fueran células madre embrionarias. El informe concluye diciendo: «Últimamente se ha producido un gran avance científico en métodos que permiten obtener células madre pluripotentes sin destruir embriones [...]. Con el apoyo a este tipo de técnicas no destructivas, en los próximos años se podrán ver nuevos descubrimientos que permitirán mantener el potencial de los progresos innovadores, lo que servirá para curar enfermedades, mientras se respeta al mismo tiempo la dignidad humana y la inviolabilidad de la vida inocente».

Pocos meses más tarde de publicarse el informe del Domestic Policy Council, varios investigadores de la Universidad de Kioto (Japón) y del Centro de Medicina Regenerativa del Hospital General de Massachusetts y del Instituto Harvard Stem Cell (de Estados Unidos) consiguieron reprogramar células adultas (fibroblastos) de la piel de ratones para que retrocedieran a su estadio inicial y tuvieran propiedades pluripotentes muy similares a las de las células madre embrionarias<sup>247</sup>.

En su firme compromiso por construir una cultura a favor de la vida en Estados Unidos, el presidente republicano George W. Bush se manifestó una vez más, el 3 de mayo de 2007, en defensa de los no nacidos, advirtiendo en una carta dirigida a la Presidenta del Congreso, la demócrata Nancy Pelosi, que vetaría cualquier iniciativa de este organismo que buscara ampliar el acceso al aborto:

«Señora Presidenta: Me preocupa que este año el Congreso apruebe alguna ley que pudiera cambiar sustancialmente las políticas y leyes federales sobre el aborto, de tal manera que se permita que los dólares de los contribuyentes puedan ser usados para destruir la vida humana. Le escribo para dejarle claro cuál es mi postura en estos temas tan importantes.

»Nuestra nación fue fundada sobre la creencia de que todo ser humano tiene derechos, dignidad y un valor incommensurable. Todos los niños deberían ser bienvenidos a la vida y protegidos por la ley. Los avances de la ciencia y la medicina no tienen por qué estar en conflicto con el imperativo ético de cuidar y proteger cada vida. De hecho, los avances en la ciencia nos han permitido ver el desarrollo de la vida desde sus primeras etapas, lo que acrecienta la obligación de los estadounidenses de proteger la vida de los más necesitados e inocentes, estén o no en el vientre materno. Estos temas son profundamente emocionales y resultan más complicados cuando se les pide a los contribuyentes estadounidenses que subvencionen procedimientos para terminar con la vida humana.

»La reciente legislación asegura que el dinero de los contribuyentes no se destine a financiar organizaciones que practiquen o promuevan abortos como método de planificación familiar. La actual ley de Estados Unidos protege a los embriones humanos.

»Le urjo para que se sigan respetando estas importantes medidas protectoras de la vida. Creo que el deber más básico del Gobierno es defender al inocente. Con esto en mente, vetaré cualquier legislación que debilite las actuales políticas y leyes federales sobre el aborto, o que fomente la destrucción de la vida humana en cualquier estadio de su evolución.<sup>248</sup>

#### 6.4. LA POLÍTICA DEL HIJO ÚNICO DE CHINA: LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

China es el país donde desde hace muchos años se viene aplicando el control de la natalidad de la manera más cruel. Las atrocidades perpetradas en estos años contra las familias, y especialmente contra las mujeres, han sido ampliamente documentadas por John S. Aird, Steven W. Mosher y Douglas A. Sylva.

John S. Aird trabajó como especialista de la Oficina del Censo de Estados Unidos entre 1957 y 1985. Allí pudo obtener documentación de primera mano sobre la política demográfica implantada en China a finales de los años setenta. Fruto de su continuo seguimiento del asunto es su libro *Slaughter of the innocents: Coercive birth control in China* (La masacre de los inocentes: control demográfico coercitivo en China) del año 1990, donde detalla los métodos empleados por el régimen comunista de Pequin para imponer la limitación de nacimientos. De él hemos obtenido abundante información que exponemos ahora resumidamente.

##### 6.4.1. Historia de la política de control demográfico en China

El artículo 49 de la actual Constitución de la República Popular China estipula que «todas las parejas casadas tienen la obligación de practicar el control de la natalidad». Las parejas no tienen libertad en esta materia; es el Estado el que determina el número de hijos que pueden tener o no. Los esfuerzos de China por controlar sus niveles de fecundidad no se pusieron en marcha inmediatamente después de la Revolución de 1949. De hecho, en aquel año, el líder chino Mao Zedong negó que China tuviera un problema poblacional. Esta negativa era coherente con la creencia de que, bajo el sistema socialista, un rápido crecimiento poblacional no impediría el crecimiento económico. Se consideraba que el control demográfico era algo antihumanitario, una forma de matar a la gente sin necesidad de derramar sangre. El propio Mao pensaba que una gran población era un activo para el desarrollo económico del país: «Es algo muy bueno que

China tenga una población grande. Incluso si la población se multiplicara muchas veces, China sería perfectamente capaz de encontrar una solución [...]. De todas las cosas que hay en el mundo, la gente es lo más valioso. Bajo el liderazgo del Partido Comunista, mientras haya gente, cualquier milagro puede hacerse realidad».<sup>249</sup>

A partir de 1953 los líderes comunistas chinos comenzaron a ver dificultades para poder alimentar a toda la población. En 1955, Mao se convenció de que una población grande podría dar problemas. En 1956 ordenó que, debido a la escasez de las cosechas, las zonas más densamente pobladas de China promovieran el control natal. Poco a poco se fue extendiendo la idea de que el control de la natalidad no era algo que perteneciera a la esfera privada sino que era un asunto de estado. Aunque las autoridades insistían en que no se debía forzar a nadie a practicar el control de la natalidad, la verdad es que comenzaron las presiones a los responsables locales para que alcanzasen resultados con inmediatez. En algunas ciudades, las mujeres tuvieron que rellenar documentos donde aceptaban la planificación de los nacimientos. Las que se oponían eran denunciadas públicamente. Por lo tanto, desde un principio hubo una gran discrepancia entre lo que manifestaban los órganos oficiales y lo que ocurría en la realidad. No obstante, en estos primeros años, las presiones no alcanzaron los niveles de años posteriores.<sup>250</sup>

En 1958, Mao retomó su idea original de que la población de China podía producir mucho más de lo que consumía. Pero esto duró muy poco, porque a finales de 1959 volvieron a surgir problemas de disponibilidad de alimentos. En los dos años siguientes, el hambre generalizada y la malnutrición causaron más de 30 millones de muertes por encima de lo que era habitual entonces en China. A principios de 1962, se volvieron a poner en marcha los programas de control demográfico.

Durante la segunda campaña de control demográfico, las autoridades volvieron a dejar claro que la procreación era un tema de estado, puesto que éste tenía que proveer a los nuevos niños que nacían de alimentos, ropa, alojamiento, educación, transporte y empleo. Se hicieron esfuerzos para retrasar la edad media de entrada al matrimonio. Se recomendó no tener más de 3 hijos. Esta segunda campaña fue mucho más efectiva que la primera, ya que el gobierno disponía de más y mejores anticonceptivos, DIU y aparatos succionadores para realizar abortos.<sup>251</sup>

En 1971 se dio un importante impulso a la política de reducción de la natalidad con la tercera campaña en la que se promovían tres lemas: *más tarde* (la edad de acceso al matrimonio), *más espaciados* (el nacimiento de los hijos) y *menos* (el número de hijos)<sup>252</sup>. Se animó a las parejas a no tener más de 2 hijos en las zonas urbanas y 3 en las zonas rurales. En 1975, Mao volvió a insistir en la necesidad de controlar el crecimiento de la población y se estableció el límite de fecundidad en un máximo de 2 hijos por familia. En ese año se instalaron casi 17 millones de DIU. Las autoridades locales fueron adoctrinadas en el sentido

de que la planificación familiar era esencial para la «revolución socialista» y la «construcción del socialismo», y que su difusión estaba de acuerdo con el «interés fundamental de las masas».

La etapa más importante del programa de control de la natalidad en China comenzó en 1979, cuando se lanzó la iniciativa estratégica conocida como la política del hijo único. Deng Xiaoping ordenó intensificar el programa de planificación familiar pidiendo que las parejas tuvieran «sólo 1 hijo si fuera posible, 2 como mucho, con un periodo de tres o cuatro años entre ambos nacimientos».<sup>253</sup> Pero al poco tiempo se eliminó la posibilidad de tener el segundo hijo. Aunque esta iniciativa no llegó a ser ley hasta septiembre de 2002, el Gobierno chino actuó desde 1979 como si lo fuera.<sup>254</sup>

Esta nueva medida fue extremadamente impopular porque significaba que muchas parejas, especialmente de las zonas rurales, cuyo primogénito fuera una niña, no tendrían a nadie que cuidara de ellos en la vejez ya que, según la costumbre china, la hija que se casa tiene que marcharse con la familia del esposo y no tiene la obligación de cuidar de sus padres. El infanticidio femenino, que había sido común en China antes de 1949 pero que prácticamente se había erradicado a principio de los años cincuenta, se recrudeció. La actitud de las autoridades chinas fue negar que la política del hijo único tuviera algo que ver con el infanticidio femenino.<sup>255</sup>

Los datos del censo de 1982 indicaron que las cohortes nacidas después de los años de hambre (1959-1961) llegarían pronto a la edad reproductiva, lo que podría provocar un nuevo incremento demográfico. Este temor llevó a las autoridades del régimen dictatorial comunista a poner en marcha una serie de medidas coercitivas muy severas. Se aprobaron leyes que imponían fuertes castigos económicos a las parejas que tuvieran un segundo hijo sin la preceptiva autorización gubernamental. Se obligó a que al menos un miembro de las parejas que tuvieran dos o más hijos fuera esterilizado. Las mujeres que ya tenían un hijo tenían que implantarse un DIU. Se registraron numerosos casos de esterilización y abortos forzados.<sup>256</sup> El año 1983 es catalogado como el de mayor coerción en la aplicación de la política de control demográfico de China.<sup>257</sup>

En 1984 el Comité Central del Partido Comunista de China diseñó una nueva política demográfica en el conocido como «Documento número 7», del que sólo se conocen partes del mismo porque nunca se llegó a publicar (algo común en la forma de funcionar de los regímenes dictatoriales). En las secciones del documento que se debían aplicar, pero se establecían unos objetivos demográficos de muy difícil consecución. Aunque se exigía que se mantuviera la política del hijo único, se permitía que, en determinadas circunstancias, alguna pareja pudiera tener un segundo hijo (parejas cuyo primer hijo fuera minusválido). Incluso se daba permiso para que un 10% de las parejas de las zonas rurales tuvieran un segundo hijo.<sup>258</sup>

En mayo de 1986 se puso en marcha una nueva iniciativa política en materia demográfica conocida como «Documento número 13» que, como el anterior, tampoco fue publicado, aunque se conocen partes del mismo. Según señala Aird<sup>259</sup>, durante los años 1987, 1988 y 1989 las exigencias del gobierno central a sus funcionarios para que cumplieran estrictamente con los requerimientos del programa de planificación familiar se incrementaron. Se permitió el uso de métodos intimidatorios como la colocación obligatoria de DIU, la esterilización y los abortos forzados.

Desde la implantación de las primeras medidas de control demográfico, las autoridades chinas no han dejado de usar términos eufemísticos para ocultar una terrible y dolorosa realidad. Se presentan como adalides de los derechos humanos y niegan hasta la saciedad que en China se cometan esterilizaciones y abortos forzados. Pero lo que estos responsables denominan como «medidas terapéuticas» en realidad son abortos forzados. Cuando dicen a los líderes locales que se tienen que «ajustar firmemente» a los programas de planificación familiar, en realidad lo que quieren decir es que tengan mano dura y no se anden con contemplaciones. La expresión «servicios técnicos» es un eufemismo utilizado para referirse a las operaciones quirúrgicas relacionadas con la reproducción (colocación de DIU, esterilizaciones y abortos).

#### 6.4.2. La posición actual de las autoridades chinas con relación a la política del hijo único

Lejos de suavizar su posición contumaz en la aplicación de la política del hijo único, el actual Gobierno chino sigue firme en su objetivo de desarrollar plenamente dicha política. El 17 de enero de 2007 se hizo pública la «Decisión del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado para la mejora plena del Programa de Población y Planificación Familiar y el tratamiento integral de los temas demográficos»<sup>260</sup>. Extractamos algunos de los párrafos más relevantes de este comunicado, donde, aunque adornado de numerosos eufemismos, no es difícil percibir su espíritu intransigente:

«Es un hecho que los implacables esfuerzos de China para llevar a cabo la política nacional de planificación familiar han tenido un enorme impacto en la construcción del socialismo peculiar chino, en el desarrollo de un país fuerte y próspero y en el rejuvenecimiento de la nación. Esta política desempeñó un papel fundamental en la promoción de los programas de población y desarrollo en el mundo entero.

»Sin excepción, todos los temas importantes con los que China tiene que tratar en su esfuerzo de alcanzar un desarrollo económico y social mejor y más rápido están muy relacionados con la cantidad, calidad, estructura y distribución de la población. Cualquier error que se cometa en el ámbito demográfico tendrá un impacto irreversible a largo plazo en el desarrollo económico y social.

»Puesto que las familias que utilizan la planificación familiar están haciendo una importante contribución al país, el gobierno debería darles prioridad a la hora de disfrutar de los beneficios de las reformas y del desarrollo [...]; los diferentes departamentos gubernamentales tienen que formular y mejorar las medidas necesarias para dar a estas parejas una consideración y un tratamiento preferencial, especialmente a las que tienen un solo hijo o dos hijas.

»Se debe mejorar la educación política e ideológica. Se deben hacer más esfuerzos para dar mayor publicidad a las leyes y políticas de planificación familiar. Se deben seguir las normas del estado de derecho. Hay que tratar con firmeza cualquier acto que viole la disciplina o rompa la ley. A los que no sigan las leyes y tengan un hijo extra se les deberá imponer impuestos de compensación social. Estos castigos se harán públicos cuando dichos actos ejerzan una muy mala influencia; si los que violan las leyes son miembros del partido y/u oficiales del gobierno, serán severamente penalizados como señalan las leyes.

»China continuará siguiendo el espíritu del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas para continuar promocionando el desarrollo y la protección de los derechos humanos.

»El Ejército de liberación y la Policía armada de China desarrollarán por separado sus medidas respectivas sobre los programas de planificación familiar y demográfica teniendo en cuenta el espíritu de esta Decisión».

Esta política coactiva ha provocado en numerosas ocasiones la violenta reacción de la gente contra las autoridades. En mayo de 2007, el *Herald Tribune* publicó una noticia sobre los disturbios que estaban teniendo lugar en la región de Guangxi, en el sudoeste de China, en donde una multitud quemó oficinas y vehículos gubernamentales cuando protestaba por las medidas represivas (multas, esterilizaciones, abortos forzados, etcétera) que el gobierno impone para controlar el crecimiento demográfico<sup>261</sup>. De acuerdo con la actual política, solamente las familias ricas o los miembros del Partido Comunista que puedan permitirse pagar las multas pueden tener más de un hijo. Sin embargo, los medios de comunicación notificaron en enero de 2008 que las autoridades habían decidido tomar medidas más contundentes y habían expulsado a más de 500 personas del Partido Comunista por desacatar la política del hijo único. La expulsión del partido es el peor castigo que se puede imponer ya que supone la pérdida del trabajo y del estatus social<sup>262</sup>. La prensa internacional denunció que en Linyi, provincia de Shandong, 130.000 personas fueron detenidas por las autoridades locales en «escuelas de población» para forzarlas, a ellas o a sus parientes, a que se sometieran a un aborto o una esterilización. Algunos activistas de derechos humanos documentaron varios casos de abortos forzados en avanzado estado de gestación<sup>263</sup>.

### 6.4.3. La violación sistemática de los derechos humanos en China

Douglas A. Sylva, director de investigación del Instituto de Familia Católica y Derechos Humanos<sup>264</sup> y director del Grupo de Investigación de Organizaciones Internacionales, publicó en el año 2002 el libro titulado *The United Nations Population Fund: assault on the world's peoples* (El Fondo de Población de las Naciones Unidas: asalto a la población mundial)<sup>265</sup>, donde recoge un enorme elenco de técnicas coactivas implantadas por los distintos gobiernos chinos. Su capítulo «La política del hijo único en China» es una valiente denuncia de los abusos del régimen dictatorial comunista de Pequín en materia de derechos humanos. Veamos algunas de las violaciones de derechos humanos básicos en China con su política demográfica.

El nivel de fecundidad de China ha caído de 4,8 hijos por mujer en edad fértil en 1979 a 1,6 hijos en 2007. Estos resultados se han logrado mediante una fuerte inversión en servicios reproductivos, abortos, esterilizaciones y anticonceptivos. Las mujeres chinas tienen la obligación de conseguir un permiso para poder quedarse embarazadas y éste sólo se otorga para un solo hijo. En la parte de arriba de la puerta de entrada a la Oficina de Planificación Familiar en la provincia de Fujian hay un letrero que dice: «Sin permiso, no hay matrimonio; sin permiso, no se permiten embarazos; sin permiso, no se puede tener un hijo»<sup>266</sup>. La ley exige abortar a las mujeres que se queden embarazadas sin el preceptivo permiso gubernamental<sup>267</sup>. Según el ministro de Sanidad, entre 1979 y 1984, se realizaron en China nada menos que 53 millones de abortos<sup>268</sup>. John Aird<sup>269</sup> estima que entre 1971 y 1985 se produjeron en China 100 millones de «operaciones de control de natalidad», entre las que se incluyen las esterilizaciones y los abortos forzados.

La ley en China también exige que las mujeres que ya hayan tenido su primer hijo se coloquen un DIU<sup>270</sup>. Según datos oficiales del Gobierno chino, en 1999, el 84% de los métodos de planificación familiar utilizados eran la esterilización de las mujeres y el uso de DIU<sup>271</sup>. Aproximadamente, la mitad de todas las mujeres en edad reproductiva declaró en 1993 que bien ellas o sus maridos estaban esterilizados<sup>272</sup>.

Desde los años ochenta, los informes sobre la práctica de los derechos humanos elaborados por el Departamento de Estado de Estados Unidos<sup>273</sup> han venido denunciando los abusos de la política de control demográfico de China. Según el informe del año 2005<sup>274</sup>, las parejas que tienen un hijo sin permiso gubernamental tienen que pagar un «canon de compensación social», que en ocasiones es diez veces superior al salario anual. Las madres solteras también tienen que pagar una multa, ya que es ilegal tener un hijo sin estar casada. A quienes se oponen a pagar las sanciones, se les confiscan sus bienes. Si una pareja ya tiene 2 hijos, es obligatorio que el marido o la mujer sean esterilizados. Para retrasar

la fecundidad, las leyes prohíben los matrimonios para las mujeres menores de 20 años y los hombres menores de 22.

Las parejas que no cumplen los requisitos de la política del hijo único o quienes ayudan a otros a tener más de un hijo se enfrentan a severas medidas, como la pérdida de su trabajo, la degradación de su categoría laboral, la exclusión de la promoción laboral, la expulsión del Partido Comunista (lo cual les impide optar a determinados trabajos) y otros castigos administrativos, incluido en algunos casos la destrucción de las viviendas. Los funcionarios de todos los niveles se ven sometidos a castigos o recompensas en función de los objetivos demográficos conseguidos en su región administrativa. Su promoción profesional depende de los objetivos alcanzados. En 1993, *The New York Times* describía algunos de los castigos que imponían los oficiales de la Oficina de Planificación Familiar: «Los aldeanos dicen que, si no pagan la multa, los funcionarios les confiscan una vaca, un cerdo, un apero de labranza, algún mueble o la televisión. A veces simplemente los rompen. En ocasiones incluso destruyen las viviendas»<sup>275</sup>.

Todas estas medidas punitivas prácticamente empujan a las mujeres a aceptar someterse a una esterilización o a un aborto. Las leyes chinas especifican que los funcionarios de la Oficina de Planificación Familiar tienen que realizar pruebas de embarazo entre las mujeres casadas con el objetivo de ofrecerles «servicios de seguimiento» (expresión eufemística para referirse al estricto control que hacen las autoridades para comprobar si una mujer está embarazada sin el preceptivo permiso). Las que se oponen a someterse a las pruebas periódicas de embarazo son penalizadas económicamente con multas de hasta 60 dólares<sup>276</sup>.

A pesar de que en China se prohíbe el abandono o el maltrato de los niños y se aplican fuertes multas y cinco años de prisión a quienes violen la ley, en torno a 1994 se abandonaba, sin embargo, una media anual de 1,7 millones de niños. La inmensa mayoría de los pequeños abandonados en orfanatos son de sexo femenino y los varones son normalmente minusválidos o tienen serios problemas de salud. Irónicamente, en algunos lugares de China, los padres que dan en adopción a sus niños tienen más posibilidades de ser multados o discriminados por sobrepasar el número de hijos permitidos que los padres que abandonan a sus hijos<sup>277</sup>.

La ley también prohíbe que las personas con ciertos tipos de enfermedad mental, como la esquizofrenia, puedan casarse. Si una pareja de novios corre el riesgo de transmitir alguna enfermedad congénita a sus hijos tiene que ser esterilizada para poder casarse. Los medios de comunicación informaron de que se habían llevado a cabo esterilizaciones forzadas entre adolescentes con problemas mentales en Nantong, provincia de Jiangsu<sup>278</sup>. En 1993, *The Washington Post* denunció que «260.000 residentes de la provincia de Gansu fueron esterilizados porque las autoridades consideraron que eran deficientes mentales»<sup>279</sup>.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos también han denunciado las prácticas coactivas del gobierno comunista de Pequín en mate-

ria reproductiva. Para una información más detallada se puede consultar los informes y las publicaciones de Human Rights Watch<sup>250</sup>, Population Research Institute<sup>251</sup>, Amnistía Internacional<sup>252</sup> o Freedom House<sup>253</sup>.

En el informe anual sobre China del año 2006, la organización Amnistía Internacional denunciaba que «numerosas mujeres chinas siguieron sufriendo esterilización y abortos forzados por parte de las autoridades locales que intentaban cumplir con las estrictas normas de planificación familiar [...] En septiembre, Chen Guangcheng, invidente y abogado autodidacta, fue acosado, golpeado y detenido de manera arbitraria en su domicilio tras intentar emprender acciones legales contra las autoridades de la ciudad de Linyi, provincia de Shandong, por practicar esterilizaciones y abortos forzados para conseguir los objetivos de fecundidad»<sup>254</sup>. En junio de 2007, la ONG Chinese Human Rights Defenders denunció que este prisionero había sido golpeado en la cárcel donde estaba recluso<sup>255</sup>.

La organización Freedom House denunció en su informe del año 2006 que se siguen cometiendo serias violaciones de los derechos humanos contra mujeres y niñas: «La ley de planificación familiar y demográfica exige que las parejas que tengan hijos sin permiso paguen una cuota extra». También reveló la práctica de abortos y esterilizaciones forzados<sup>256</sup>.

Steven W. Mosher es el presidente del Population Research Institute, una organización dedicada a denunciar los abusos sobre los derechos humanos cometidos en nombre de la planificación familiar. En los años 1979 y 1980 vivió en zonas rurales de China y presencié numerosos casos de mujeres que eran esterilizadas contra su voluntad o que eran forzadas a abortar por violar las leyes del hijo único. Cuando volvió a la Universidad de Stanford, comenzó a escribir sobre los horrores de los que había sido testigo en China. Pero las autoridades de esta universidad, presionadas por el Gobierno chino, en lugar de concederle el título de Doctor en Antropología, le expulsaron de la universidad<sup>257</sup>. Su libro más conocido, publicado en 1993, se titula *El calvario de una madre: la lucha de una mujer contra la política del hijo único de China*.

El 10 de junio de 1998, varias personas testificaron ante el Subcomité de Operaciones Internacionales y Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos<sup>258</sup>. Ante él prestó declaración la señora Gao Xiao Duan que, de 1984 a 1998, fue empleada de la Oficina de Planificación Familiar en Jinjiang, provincia de Fujian (China). Ella se encargaba de expedir los certificados para que las parejas pudieran tener un hijo. Sin el certificado, las mujeres no podían dar a luz. Si se descubría a una mujer que estaba embarazada sin el correspondiente permiso, se le obligaba a abortar, independientemente de su tiempo de gestación. La señora Gao citó y aportó documentación de numerosos casos de abortos forzados (incluso en el noveno mes de gestación), de controles sistemáticos de las mujeres en edad reproductiva, de sanciones económicas a las mujeres que no acudían a realizarse los exámenes de embarazo, de esterilizaciones forzadas a las madres con 2 hijos, de destrucción de viviendas de parejas que tienen hi-

jos sin el obligado permiso gubernamental, de implantación forzada de DIU, de detenciones... Su testimonio fue especialmente estremecedor cuando describió un caso realmente dramático: «Una vez encontré a una mujer embarazada de nueve meses, pero no tenía el permiso para tener un hijo. De acuerdo con la normativa, se le forzó a abortar. En la sala de operaciones, pude ver los labios, los brazos y las piernas del niño moviéndose. El médico le inyectó un veneno en la cabeza y el niño murió y fue arrojado a un contenedor de basura. Después de esto, el marido abrazaba a su esposa y, llorando desconsoladamente, gritaba «¿Qué clase de hombre soy? ¿Qué clase de marido soy? No puedo ni tan siquiera proteger a mi esposa y a mi hijo. ¿Tengo humanidad?».

Otro testimonio desgarrador que se escuchó en el Congreso de Estados Unidos fue el de la señora Zhou Shiu Yon, nacida en la provincia china de Fujian y que fue víctima de la política familiar de su país. Cuando tenía 19 años se quedó embarazada, pero las autoridades no le dieron permiso para casarse porque no había cumplido los 20 años. Cuando acudió al hospital al sentirse indispueta, el médico la denunció porque no tenía el preventivo permiso para tener un hijo. Se le obligó a someterse a un aborto. Pudo escapar del hospital y huir a Estados Unidos después de sobornar a las enfermeras.

Otra persona llamada a testificar en la vista ante el Subcomité de Derechos Humanos fue Harry Hongda Wu, fundador de la Laogai Research Foundation<sup>259</sup>. Harry Wu estuvo encarcelado en China durante diecinueve años. La fundación que preside documenta e informa sobre las violaciones sistemáticas en China, incluyendo las ejecuciones, el tráfico de órganos de prisioneros ejecutados, el uso de la fuerza en la aplicación de la política de hijo único y la persecución a quienes practican algún tipo de religión. El señor Wu expuso una detallada relación de medidas que toman habitualmente las autoridades chinas para someter a la gente a sus objetivos demográficos. Además de reiterar las denuncias de esterilizaciones y abortos forzados, de arrestos intimidatorios, de pruebas periódicas de embarazos, de destrucción de viviendas a familias que no se ajustan a las severas normas que marcan las leyes en materia reproductiva, también enumeró casos de parejas que son discriminadas y no se les consiente obtener el permiso de conducir, el pasaporte o un simple préstamo bancario.

Según un reportaje publicado en la revista *Time Magazine* el 12 de septiembre de 2005<sup>260</sup>, no hacía mucho tiempo que las autoridades chinas habían puesto en marcha una campaña para realizar abortos y esterilizaciones en la provincia de Shandong. Se documenta el caso de una mujer de 23 años, Li Juan, a la que, sólo dos días antes de la fecha prevista para dar a luz a su hija, los funcionarios de la Oficina de Control Demográfico la retuvieron y la llevaron a una clínica para someterla a un aborto. Le inyectaron una aguja en el abdomen hasta que penetró en el feto de nueve meses. «Al principio podía sentir a mi niña dando muchas patadas, pero después de un rato dejó de moverse», dijo la joven. Diez horas más tarde, Li dio a luz a una niña que se iba a llamar Shuang (Brillante). La niña nació muerta. Para asegurarse de su fallecimiento, los oficiales sumer-

gieron el cuerpo del bebé durante varios minutos en un barreño de agua que estaba al lado de su cama.

Según la citada revista, éste fue sólo un ejemplo de lo sucedido a muchas otras mujeres. Desde marzo de 2005, los oficiales de la Oficina de Planificación Familiar llevaron a cabo una campaña para buscar mujeres embarazadas sin el preceptivo permiso y someterlas a abortos, y parejas que ya hubieran alcanzado el número máximo de hijos permitidos a las que poder esterilizar. Algunas se escaparon y se escondieron en casas de familiares. Se detuvo a los parientes y se les obligó a pagar «sesiones de estudio», donde tenían que admitir lo equivocado que estaban. Sólo en el distrito de Linyi, en la comarca de Yinan, se esterilizó al menos a 7.000 personas en cuatro meses. A algunas personas incluso se les golpeó hasta la muerte por ayudar a algunos familiares a evitar la esterilización.

La severidad con la que el Gobierno chino aplica la política del hijo único se pone de manifiesto también en la dureza con la que castiga a las autoridades locales que contravienen las disposiciones. En diciembre de 1993, por ejemplo, se condenó a muerte a dos dirigentes de un hospital de la provincia de Henan y se encarceló a otros cuatro funcionarios por haber ayudado a algunas mujeres (a cambio de dinero) a evitar la esterilización exigida por la ley<sup>291</sup>.

Nicholas D. Kistof<sup>292</sup> denuncia que las medidas eugenésicas han desempeñado un papel importante en la justificación del programa de control demográfico de China. En 1989, se aprobaron unas normas en la provincia de Gansu que obligaban a esterilizar a los deficientes mentales (en China se considera que una persona es retrasada si tiene un coeficiente intelectual inferior a 49, o tiene ciertas discapacidades en el lenguaje, la memoria, la orientación o el razonamiento). En 1991, se aprobaron leyes semejantes en otras cinco provincias más. La propia ministra de Planificación Familiar, Peng Peiyin, defendió la conveniencia de la esterilización forzada de los disminuidos intelectuales.

La organización Independent Tibet Network<sup>293</sup> denuncia en su página web la violación sistemática de los derechos humanos que China lleva a cabo en el Tíbet y en el este del Turquestán. Esta página recoge numerosos documentos y testimonios de dichas violaciones. Es un interesante elenco de citas de frases emblemáticas realizadas por algunas autoridades chinas que describen muy bien el verdadero espíritu de lo que eufemísticamente se denomina en China «sistema de planificación familiar»:

«Los nacimientos no planificados y los nacimientos fuera del matrimonio están prohibidos» (artículo 2, Regulaciones del control de la natalidad del municipio de Tianjin, 2001).

«¡Para conseguir reducir el crecimiento de la población utilicen los medios que estimen oportunos, pero consíganlo!» (comentario de Deng Xiaoping, Presidente de China de 1978 a 1997, recogido en el *China Spring Digest*, Nueva York, 1987).

«Sólo las medidas coercitivas pueden ser eficaces para aliviar los problemas causados por la explosión demográfica» (oficial del Ministerio de Agricultura, *Economic Daily*, Pequín, 24 de enero de 1989).

«Las parejas que hayan tenido alguna enfermedad hereditaria grave, incluyendo enfermedades mentales, incapacidad mental hereditaria, deformidades hereditarias, etcétera, tienen terminantemente prohibido tener hijos» (artículo 22 de las regulaciones de control de la natalidad del año 1990 de la provincia de Henán).

«Las poblaciones minoritarias tienen más probabilidades de ser mentalmente retrasadas, tener menor estatura, ser enana o loca» (Den Bihai, *China Population News*, Pequín, 22 de diciembre de 1989).

«La gente mentalmente retrasada tendrá hijos idiotas» (Li Peng, primer ministro de China, *China News Service*, abril de 1990).

«La regla general es que los idiotas no pueden casarse a menos que sean esterilizados» (oficial del Gobierno chino, *The New York Times*, 15 de agosto de 1991).

Las consecuencias inmediatas que conlleva la agresiva política de control demográfico del régimen comunista chino son las violaciones de derechos humanos, pero aquí no terminará el desconsuelo de la población china. A medio plazo, China va a tener que enfrentarse a una estructura demográfica muy envejecida. Las cohortes en edad laboral tendrán que sostener un porcentaje creciente de población dependiente envejecida. Los efectos económicos de este cambio en el perfil demográfico no son nada halagüeños. La estructura 4-2-1 (cuatro abuelos, dos padres y un hijo) sólo puede tener efectos económicos muy preocupantes en un país donde el sistema de pensiones tan sólo cubre las necesidades de una pequeña porción de la población y donde los ancianos han dependido tradicionalmente de los apoyos de sus hijos para poder sobrevivir. Los oficiales de Guangzhou (o Cantón, en su nombre tradicional en español), una ciudad en el sur de China, ya están animando a algunos ciudadanos a tener 2 hijos en un esfuerzo de frenar el rápido proceso de envejecimiento de la población. Se espera que en el año 2010 esta ciudad tenga más de un millón de personas mayores de 60 años, mientras que su capacidad de atender ancianos en residencias geriátricas tan sólo será de 40.000 plazas. La situación en las zonas rurales de China todavía será peor, pues el sistema de seguridad social sólo está implantado en las ciudades<sup>294</sup>.

Según un estudio del Comité Nacional de la Edad de China, este país cuenta ahora con seis trabajadores por cada ciudadano retirado, pero esta proporción caerá a dos por cada uno entre los años 2030 y 2050. El director de este organismo, Yan Qingchun, reconoció que «con poca gente en edad de trabajar y más presión para mantener a los ancianos, la economía sufrirá si la productividad no crece»<sup>295</sup>.

Forzar a los ciudadanos a someterse a esterilizaciones o abortos viola los principios de libertad y dignidad humana respaldados en todas las declaraciones de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Las políticas coercitivas limitan injustamente la libertad de los hombres. Si un gobierno, como el chino, pone en marcha una política de hijo único para evitar la superpoblación, y ello lleva a que muchas parejas comentan infanticidios femeninos, ese gobierno no puede excusarse en pomposas declaraciones oficiales diciendo que nunca fue su intención fomentar el infanticidio. Las solemnes declaraciones oficiales no exigen a los gobiernos de su responsabilidad por las consecuencias de sus políticas: «En las políticas sociales, la vida tiene tanto valor que no puede ser canjeada por la más convincente demanda pública».<sup>286</sup>

## 6.5. OTROS EJEMPLOS DE PROGRAMAS COERCITIVOS DE CONTROL DEMOGRÁFICO EN EL MUNDO: LA INDIA, BANGLADÉS Y LATINOAMÉRICA

### 6.5.1. Las políticas de control demográfico en la India

China no ha sido el único país donde se han llevado a cabo programas coercitivos de control demográfico. De hecho, la India fue el primer país en desarrollo en implantar, en 1951, un programa de planificación familiar. En 1959, varios de sus estados ya ofrecían compensaciones económicas a la gente pobre que aceptara ser esterilizada. A quienes se sometían a estas intervenciones se les regalaba un aparato de radio. En 1982 se pagaba 22 dólares a cada mujer que se sometía a una intervención quirúrgica de esterilización y 15 dólares a cada hombre.<sup>287</sup> También se recompensaba económicamente a los agentes encargados de movilizar y animar a la gente para que se realizaran estas operaciones quirúrgicas. La primera ministra Indira Gandhi estableció en 1975 un periodo de emergencia, suspendió los derechos civiles y comenzó a organizar centros para realizar vasectomías en todo el país. Indira Gandhi declaró en enero de 1976: «Tenemos que actuar ya con decisión para reducir las tasas de fecundidad. No debemos dudar en aplicar medidas que se podrían calificar como drásticas. Algunos derechos individuales se deben suspender para favorecer los derechos humanos de la nación: el derecho a vivir, el derecho a progresar».<sup>288</sup>

Según Moha Rao<sup>289</sup>, no es posible entender el programa de planificación familiar en la India sin hacer una referencia a los actores internacionales que establecieron su agenda, fundamentalmente, Estados Unidos. El movimiento para el control de la población estaba formado por un grupo de organizaciones públicas y privadas entrelazadas que incluían a la Fundación Rockefeller, el Population Council, la Fundación Ford, el Gobierno de Estados Unidos y otros países europeos occidentales, además de diversas instituciones multilaterales, como el UNFPA y el Banco Mundial.

Matthew Connelly<sup>300</sup>, que ha investigado las campañas de control de la población en la India, concluye que en los años cincuenta y sesenta se llevaron a cabo políticas coercitivas con graves y dolorosas consecuencias para la salud «con el pleno conocimiento de los asesores extranjeros e incluso con sus explícitas recomendaciones. No sólo se toleraban las medidas coercitivas en los pacientes de las clínicas, sino que también ocurría en el ámbito internacional, especialmente cuando Estados Unidos usó la ayuda alimentaria como una forma de presión política. Esta práctica condujo a una funesta campaña en 1965-1967, donde se colocaron dispositivos intrauterinos a 29 millones de mujeres». Connelly detalla la participación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Fundación Ford, la IPPF y el Population Council en la implementación y financiación de esta campaña.

Moha Rao<sup>301</sup> denuncia que, a finales de los años setenta, muchos estados indios pusieron en marcha una serie de medidas coercitivas con el objetivo de esterilizar el mayor número de personas. Por ejemplo, se estableció que para conseguir un permiso gubernamental, obtener créditos e incluso abonos para las tierras de cultivo era necesario presentar antes un certificado de esterilización. También se denegó la escolarización a los niños cuyos padres tuvieran más de 3 hijos o, después de eliminar alguna zona chabolista, sólo se realojó a las familias que aceptaron ser esterilizadas. En algunos casos incluso se utilizó la fuerza policial para movilizar a la gente a someterse a una esterilización.

Sólo en la segunda mitad de 1976 se esterilizó en la India a 6,5 millones de personas. Muchas de ellas eran analfabetas y desconocían realmente qué les estaban haciendo y cuáles eran sus consecuencias. Más del 70% de las intervenciones quirúrgicas se realizaron en campos donde apenas había las mínimas medidas de higiene. Cientos de personas, si no miles, murieron por las infecciones asociadas con las operaciones<sup>302</sup>. En ese mismo año, el estado de Maharashtra aprobó una Ley de Familia (conocida como la Ley de Esterilización Obligatoria) que obligaba a la esterilización de quienes tuvieran ya 3 hijos. Otros estados como el de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh siguieron el ejemplo de Maharashtra. Esto provocó importantes revueltas entre la población que llegó a atacar a los vehículos oficiales que llevaban a cabo la campaña de «planificación familiar». La población dejó de acudir a los centros de salud por temor a ser esterilizada. Incluso muchos se negaron a ser vacunados por miedo a quedar estériles. Se esterilizó forzadamente incluso a gente soltera, personas sin hijos, pacientes de hospitales, internos de prisiones, personas que estaban en centros de acogida y personas «sin techo». Hubo revueltas y enfrentamientos contra la policía que provocaron varios muertos.

Las numerosas protestas y revueltas contra todo este tipo de medidas provocaron, según algunos analistas, la caída del gobierno de Indira Gandhi. Sin embargo, el nuevo gobierno formado tras las elecciones de 1977 también se comprometió a impulsar las políticas de planificación familiar aunque, eso sí, de una forma totalmente voluntaria. Si Indira Gandhi había centrado su campaña en la

esterilización de los hombres, el nuevo gobierno se volcó en la esterilización de las personas más indefensas, dóciles, silentes y débiles de la sociedad patriarcal india, es decir, las mujeres, pues los políticos se dieron cuenta de que la esterilización de los varones suponía un elevado coste político. A principios de los años ochenta se esterilizaron mujeres de forma masiva en tiempo récord en numerosos campamentos gracias a la disponibilidad de laparoscopias. El 90% de las esterilizaciones realizadas en 1989 y 1990 se hicieron a mujeres<sup>303</sup>. Las parejas con más de 3 hijos fueron las primeras en ser esterilizadas.

En 1983 se introdujo en el programa de «planificación familiar» la inyección Net-En, a pesar de que en los mercados occidentales había sido retirada al descubrirse que era potencialmente cancerígena. Las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido se vieron muy presionadas por los fabricantes de este fármaco y por los grupos a favor del control demográfico para que autorizaran su uso en la India. En 1986 se realizaron ensayos clínicos con Net-En en mujeres que no fueron informadas de que estaban formando parte de una investigación, lo que supone una violación de las normas de la Declaración de Helsinki sobre ética en la praxis médica.

En 1984 también se llevaron a cabo ensayos clínicos con el implante Norplant, pero a los dos años se interrumpieron por el temor de que pudiera ser cancerígeno. Posteriormente, el Population Council desarrolló una nueva versión del Norplant que se distribuyó ampliamente con la financiación del Banco Mundial. Algunos estudios posteriores demostraron que el 58% de las mujeres que utilizaron Norplant dejaron de usarlo en menos de cinco años alegando problemas menstruales, trombosis, hepatitis, artritis, vista borrosa, etcétera. También se denunció que a muchas mujeres de Bombay y Baroda a quienes se les había implantado el Norplant no se les informó debidamente de que estaban formando parte de un ensayo clínico. Lo más sorprendente, según Roa<sup>304</sup>, fue que en Baroda fueron las mujeres musulmanas los objetivos principales de estos ensayos clínicos.

Otro gran escándalo denunciado por Roa fue la utilización de quinacrina por parte de numerosas ONG y médicos para esterilizar ilegalmente a muchas mujeres. Esto se hizo a pesar de los informes de la OMS que advertían de las posibles consecuencias cancerígenas de su uso, además de otros muchos problemas para la salud. La promoción de este método de esterilización fue realizada en gran medida por el doctor Elton Kessel de la International Federation of Family Health (IFFH) y el doctor Stephen Mumford del Centre for Research on Population and Security (una organización declaradamente antinatalista). Los promotores de este método manifestaron que más de 100.000 mujeres fueron esterilizadas con quinacrina. A pesar de que la Corte Suprema de la India prohibió la importación, distribución y uso de esta sustancia, diversos informes indican que los médicos siguen utilizándola en la actualidad<sup>305</sup>.

Los salarios de los funcionarios públicos indios dependían del número de personas que convenían para ser esterilizadas; las raciones de alimentos y otros

servicios públicos no eran accesibles para los que no estuvieran esterilizados. En 1990, dos médicos indios denunciaron en la revista *The Lancet* las coacciones a las que se sometía al personal sanitario para que alcanzaran los objetivos fijados por el gobierno en materia demográfica: «Se presiona muy fuertemente a las autoridades locales para que alcancen los objetivos establecidos y se gratifica a los médicos en función de las esterilizaciones que han realizado [...]». Habitualmente se autorizan incentivos (en metálico o en especies) no sólo para premiar los candidatos a ser esterilizados, sino también para quienes les animan a que se esterilicen [...]. No se da la información necesaria para obtener el consentimiento. Muchos ginecólogos alardean del número de esterilizaciones que consiguen llevar a cabo»<sup>306</sup>.

Jacqueline Kasun<sup>307</sup> cita varias campañas donde se inducía al control demográfico a través de incentivos económicos. Por ejemplo, señala el caso de una aldea india donde se ofreció dinero si el 75% de los hombres se sometía a la vasectomía. En otro pueblo el 100% de las parejas elegibles fueron esterilizadas a cambio de la construcción de un pozo de agua<sup>308</sup>.

El movimiento antinatalista permaneció impertérrito a las denuncias que aparecieron en la prensa internacional sobre la campaña de esterilización obligatoria. El que fuera presidente del Banco Mundial, Robert McNamara, visitó la India durante el conocido como «período de emergencia» y apoyó el programa diseñado por Indira Gandhi. Paul Ehrlich, autor de *La bomba de la población*, criticó a Estados Unidos por no apoyar la esterilización obligatoria de todos los hombres indios con tres hijos o más: «Deberíamos haber dado apoyo logístico con helicópteros, vehículos e instrumental médico. Deberíamos haber enviado médicos [...] ¿Coerción? Quizá, pero coerción por una buena causa». El miembro del UNFPA, Joep van Arendok, que fue personalmente a la India en 1976 a investigar la situación, sostuvo en todo momento que no se habían realizado esterilizaciones forzadas, excepto en unos pocos casos<sup>309</sup>.

### 6.5.2. Los abusos cometidos en otros países

Farida Akhter<sup>310</sup> ha documentado la historia de la introducción de los programas de implantes subcutáneos Norplant en Bangladés. Este dispositivo segrega una sustancia (progesterona) durante cinco años que hace más espeso el moco cervical, lo que obstaculiza la entrada del esperma en el útero. También tiene efectos abortivos, pues dificulta que, en caso de producirse la fecundación, el blastocito pueda anidar en el útero materno. Según Akhter, la difusión de este sistema de regulación de la natalidad se hizo con coerción y violencia a finales de los años ochenta. Standing y Hartmann<sup>311</sup> denunciaron que, después de las devastadoras riadas de 1984 en Bangladés, las mujeres que aceptaron ser esterilizadas recibieron un certificado que les daba derecho a un sari (vestido tradicional), dinero y una pequeña cantidad de cereales.



El periódico británico *The Times* denunció el 15 de octubre de 2006 en un artículo titulado «Racially impure» children killed»<sup>312</sup> (asesinato de los niños racialmente impuros) que los bebés que nacen en parejas de raza mixta (chino-coreanos, sobre todo) son eliminados con regularidad por los médicos en Corea del Norte. El doctor refugiado norcoreano Ri Kwang explicó que en su país se busca la pureza racial: «No hay gente con defectos físicos en Corea del Norte». A esta denuncia hay que añadir la que la ONU hizo sobre los abortos forzados e infanticidios en este país de régimen totalitario comunista. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos incluyó los abortos forzados e infanticidios norcoreanos en su informe sobre violaciones de los derechos humanos del año 2005. Un documento de la organización Helping Hands Korea aseguró que los abortos forzados son práctica común en las prisiones norcoreanas de mujeres<sup>313</sup>.

El ministro de Sanidad de Brasil, Alcení Guerra, denunció en 1991 un plan internacional para esterilizar a las mujeres brasileñas. A pesar de que estas intervenciones estaban prohibidas en Brasil, en cinco años se llegaron a esterilizar 7,5 millones de mujeres en edad fértil gracias a un programa de 32 millones de dólares subvencionado por la IPPF, el Population Council, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller y el Banco Mundial. Según el Instituto Brasileño de Estadística, se esterilizó al 74% de las mujeres que habían tenido un parto con cesárea, tanto en clínicas gestionadas por organizaciones de planificación familiar como en hospitales públicos<sup>314</sup>. En 1986 el 44% de las mujeres brasileñas en edad fértil estaban esterilizadas<sup>315</sup>.

En Puerto Rico, tanto las agencias privadas (incluida la IPPF) como el Gobierno puertorriqueño, apoyado con los fondos de Estados Unidos, llevaron a cabo campañas de esterilización de mujeres de forma gratuita o a un bajo coste. En 1968, una tercera parte de las mujeres en edad fértil de la isla estaban esterilizadas. Hartmann<sup>316</sup> señala que muchas de ellas desconocían que este tipo de intervenciones quirúrgicas son irreversibles.

Algo semejante ocurrió en Colombia a principio de los años ochenta. Algunas organizaciones privadas apoyadas por la USAID, la IPPF y la Asociación para la Esterilización Voluntaria (que es una institución que estuvo vinculada con el movimiento eugenésico) llevaron a cabo una campaña para promocionar la esterilización. Las mujeres colombianas, aunque no fueron forzadas, tampoco recibieron la información adecuada de lo que supone este tipo de operación. La información que recibieron fue insuficiente y no se mencionaron los posibles efectos secundarios ni los problemas que puede traer consigo. Incluso, a las mujeres que daban a luz en los hospitales públicos y accedían a esterilizarse se les ofrecía la posibilidad de quedarse en el centro médico dos días más<sup>317</sup>.

En 1995, el entonces Presidente de Perú, Alberto Fujimori, anunció un programa masivo de esterilización de la población con el objetivo de combatir la pobreza. Cientos de miles de mujeres fueron esterilizadas. Casi desde el comienzo de la campaña hubo denuncias de abusos de los derechos humanos: presiones

a médicos para alcanzar las cuotas mínimas de esterilización establecidas por el gobierno, incentivos económicos a los sanitarios que presionaban para que la gente se esterilizara, mujeres que eran esterilizadas sin su consentimiento, etcétera. Cuando estas denuncias salieron a la luz, la USAID retiró la subvención al Gobierno peruano. Sin embargo, el UNFPA no sólo no condenó las prácticas coactivas del gobierno de Fujimori sino que siguió subvencionando este programa<sup>318</sup>.

En el año 2002, una investigación ordenada por el Ministerio de Salud de Perú concluyó que más de 300.000 personas (la mayoría de ellas mujeres) fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori. La Comisión de Investigación del Congreso peruano determinó que el 90% de las personas esterilizadas recibieron presiones o fueron engañadas. Asimismo, esta comisión destacó el papel relevante desempeñado por el UNFPA en la financiación y el asesoramiento técnico de dicha campaña. El UNFPA se justificó diciendo que «en último término corresponde al Gobierno de Perú y no al UNFPA valorar si se han cometido abusos o no de los derechos humanos»<sup>319</sup>. Es decir, con este tipo de declaraciones, el UNFPA no sólo demuestra que se lava las manos en los programas que él mismo financia sino que, además, niega cualquier responsabilidad a la hora de determinar si se han violado o no los derechos humanos en el desarrollo de los mismos<sup>320</sup>.

Varios indígenas del estado mexicano de Guerrero, en el sur de México, fueron esterilizados con engaños en una campaña de sanidad que se realizó en 1998. Se sometieron a una vasectomía a cambio de beneficios para su comunidad que nunca llegaron. «Prometieron que si nos dejábamos esterilizar nos harían una clínica con médicos y medicinas, y que nos darían comida, ropa, mantas, vivienda y becas, pero no cumplieron», manifestó uno de los afectados. La organización Centro de Derechos Humanos de la Montaña denunció que «el gobierno estatal ejecuta una política etnocida en contra de las comunidades indígenas de Guerrero»<sup>321</sup>.

Otros muchos países en África, Asia y Latinoamérica han sido víctimas de agresivos programas de esterilización y de abortos forzados. Incluso, algunos de estos abusos también se han cometido en Estados Unidos. La población de mujeres pobres negras, hispanas, indias nativas, otras pertenecientes a minorías étnicas, internas de prisiones y deficientes mentales han sido quienes se han visto más afectadas. Según denuncia la feminista Betsy Hartmann<sup>322</sup>, las mujeres pobres y las negras son sometidas en un mayor porcentaje a histerectomías (extirpación quirúrgica del útero) en lugar de ligaduras de trompas, a pesar de que tienen un mayor riesgo de muerte. En 1976 el Gobierno estadounidense reconoció que 3.000 indias nativas estadounidenses habían sido esterilizadas sin cumplir con todos los requisitos de consentimiento que exigían las leyes. Para conocer otros casos de esterilizaciones forzadas en Estados Unidos y en Europa, se puede consultar los apartados 6.1.5. El eugenismo en Estados Unidos y 6.1.7. El desarrollo de la eugenesia en Europa.